

Movilización popular y construcción de la otredad negativa en Argentina (1969-1975):**Una aproximación desde los discursos de *La Prensa* y *La Opinión***

Micaela Ciardiello (Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

micaela.ciar@hotmail.com

Mercedes Nachón Ramírez (Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

meminachonramirez@gmail.com

Introducción

Varios autores distinguen un potente ciclo de protesta entre 1969 y 1975, desarticulado por el proceso genocida experimentado en nuestro país (Ramírez y Viguera, s/f; Santella y Scodeller, 2012; Svampa, s/f). Trabajando con el discurso que la prensa gráfica teje sobre este fenómeno, este trabajo se propone analizar las representaciones construidas en torno a los actores movilizadores y sus motivaciones, a efectos de comprender los modos en que aquella contribuyó a la configuración de la otredad negativa titulada “delincuencia subversiva”.

En esa primera fase genocida se da la simbólica marcación del “otro” a ser exterminado. Mediante este proceso, se busca “[...] delimitar dos campos: los iguales, los sujetos cotidianos, mayoritarios, como distintos cualitativamente de los otros, de aquellos que no quieren ser como *todos* y, por lo tanto, que *no deben ser*” (Feierstein, 2011: 218).

Tomamos como fuentes primarias los periódicos argentinos *La Prensa* y *La Opinión*, ambos de amplia circulación durante la época. El primero, fundado en 1869 por José C. Paz, estuvo estrechamente ligado desde sus inicios a capas sociales liberales, conservadoras y tradicionalistas, así como expresó un profundo antiperonismo. En contraposición, *La Opinión*, el diario de Jacobo Timerman, comenzó a circular hacia abril de 1971, identificándose con la oposición a la presidencia de Lanusse y a la “Revolución Argentina”, en general. A diferencia de *La Prensa*, que aún continúa difundiendo, fue clausurado y expropiado en 1977. Una vez secuestrado Timerman, el “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN) continuó publicándolo hasta 1981, modificando completamente su estilo y línea ideológica (Porta, 2010).

En cuanto a la metodología implementada, partimos de la delimitación de las más impactantes movilizaciones de ese ciclo: el Cordobazo y la serie de protestas provinciales que éste abre (los “azos”); las movilizaciones implicadas en las masacres de Trelew y Ezeiza, y el Devotazo; la descomunal oleada de tomas de establecimientos de diverso tipo, durante el

corto gobierno de Cámpora; la larga huelga de los trabajadores metalúrgicos de las plantas de Acíndar, Metcon y Marathon en Villa Constitución (Santa Fe), desatada por la denuncia de un “complot subversivo”; y la masiva movilización contra los ministros Rodrigo y López Rega, tras el lanzamiento del paquete de medidas económicas conocidas popularmente como “Rodrigazo”. Procedimos al relevamiento de estos “hitos”, a partir del momento en que eran presentados por primera vez (noticias y editoriales), continuando hasta el fin de su cobertura. Principalmente, rastreamos aquellas expresiones y adjetivos que caracterizaban a los sujetos, sus acciones y motivaciones, con el objeto de hallar los matices con los que esa otredad negativa fue elaborada. En paralelo, tratamos de captar las nociones de orden/desorden circulantes, vinculadas con la percepción de la escalada de violencia que acompañó esa convulsionada etapa. Ello porque consideramos que existe cierta relación entre la construcción de alteridades amenazantes y los diagnósticos sociales por parte no sólo de quienes ocupan el poder, sino además de diversos sectores sociales. Esos imaginarios pueden ser recolectados y, al mismo tiempo, promovidos desde la prensa, según Porta (2010).

La sufijación de un disruptivo modo de protesta y los nuevos responsables de la violencia

El derrocamiento de Perón el 16 de septiembre de 1955 abrió un período de larga proscripción del movimiento político mayoritario del país, signando la ilegitimidad e inestabilidad de los gobiernos posteriores. Ello derivó en la expresión del descontento social a través de novedosas vías que escapaban de los marcos institucionales. Día a día, crecía la convicción por la cual a la violencia “desde arriba” debía responderse con más violencia, “desde abajo”. El duro autoritarismo implantado por la “Revolución Argentina” desde junio de 1966, profundizó esa tendencia. En ese marco, tuvo lugar la gran movilización popular conocida como “Cordobazo”. Iniciada con un paro de la Confederación General del Trabajo (CGT), confluyeron en la ciudad de Córdoba sindicalismo combativo, clase obrera, movimiento estudiantil, vecinos y la novedad de los francotiradores, los días 29 y 30 de mayo de 1969. Además, nuevos actores (como las organizaciones armadas), surgieron y a partir de allí se consolidaron. Como indica De Riz (1984), “el Cordobazo irrumpió con la fuerza desestabilizadora de más de una década de crisis política irresuelta y llevó a desandar el camino emprendido por los militares de la ‘Revolución Argentina’” (p. 138). La explosión de una ola de protestas provinciales avivó la preocupación del poder político. Provincias como Tucumán, Rosario y Mendoza fueron espejos de la ascendente conflictividad social.

Ya adentrándonos en la manera en que el Cordobazo fue tematizado por el diario en ese entonces dirigido por Alberto Gainza Paz, encontramos que la misma mañana del 29 de mayo se publica en tapa una noticia acerca del paro convocado por la CGT. La subversión queda fuertemente entrelazada al ejercicio de la violencia (ya contra bienes, ya contra la vida ajena), lo que justificaría no sólo la atribución de cualidades criminales a ese “otro” (colectivo e individual) problemático, sino también el intento por restablecer un (supuesto) estado previamente existente, “normal” (y, por ello, deseable) y trastocado por esa intervención subversiva. A esto se suma la planificación de sus actividades, que presenta novedosas y complejas estrategias, como la “táctica de la guerrilla urbana”. Dicho extremismo ideológico es identificado con la subversión y se le adosa un componente armado, quedando equiparado a los primeros ensayos de la guerrilla (*La Prensa*, 29/5/1969).

El 30 de mayo, segundo y último día de protesta, se hace referencia a un conjunto de “disturbios” y “graves desórdenes”, fruto del enfrentamiento entre la policía y “grupos de manifestantes”. De un modo algo más concreto, se habla de “huelguistas” y “grupos numerosos integrados en gran parte por obreros y estudiantes”, así como también se especifica en qué consiste el desorden que ellos provocan: asaltos, saqueos, incendios y explosiones, aglutinados bajo la imagen de la “orgía vandálica”, que criminaliza la protesta (*La Prensa*, 30/5/1969). Como consecuencia, se devuelve la efigie de una ciudad paralizada y anegada por el caos, cuyo funcionamiento habitual se ve alterado debido a las interrupciones del transporte público y de la actividad comercial, de la asistencia a clases, y la escasez de alimentos. Sólo una vez restablecidos estos servicios y actividades, se informa que la ciudad “vuelve a la normalidad” (*La Prensa*, 1/6/1969). Con ello, la concepción de paz, orden público y normalidad remite a una situación de no movilización. Y no sólo a la quietud que la falta de protesta supone, sino además, a la obediencia, disciplina y ausencia de violencia civil.

Con todo, la pluma de los periodistas de *La Prensa* nos pone frente a un cuadro en el que los manifestantes motivan la participación de los agentes de seguridad, casi como en términos unilaterales de acción y reacción. Ya el hecho de que se los llame “fuerzas del orden” habla por sí solo, al tiempo que se brinda una imagen civilizada y disciplinada de los mismos (*La Prensa*, 30/5/1969). Este contraste queda subordinado a otro mayor, relativo a las visiones del orden y el caos, ya que las expresiones empleadas para caracterizar a los grupos involucrados alude a esas dimensiones. En efecto, el diario evoca una idea de orden o normalidad nutrida por fotografías y croquis que ilustran las noticias, lo que aporta una imagen de ciudades sumidas en la anomia. Como parte de la transición a una definitiva restauración del orden, se muestra la mediación del personal de seguridad.

Tal vez, el hecho más saliente en lo concerniente a la elaboración de la otredad negativa tiene que ver con cierto opacamiento de quienes realmente animaron el Cordobazo, en detrimento del robustecimiento del papel de grupos armados y francotiradores, que incipientemente asomaban. Pese a que el componente propulsor es obrero y estudiantil, y luego confluye en el levantamiento gran parte de la población civil cordobesa, son los “extremistas” o “subversivos” quienes parecieran incitar los acontecimientos o inclusive, tomar ventaja sobre la situación, desvirtuando los reclamos estudiantiles y obreros. Equiparados los términos “guerrilla”, “extremismo” y “subversión”, se restituye la idea de una sociedad plausible de ser corrompida por comunistas y peronistas.

Para el resto de las movilizaciones conocidas como “azos”, encontramos una cobertura prácticamente gemela. Aunque la metodología de protesta es casi la misma y se mantiene la lógica de acción/reacción ya descrita, las masivas manifestaciones posteriores rebasan la intervención policial y militar (*La Prensa*, 18/9/1969; 6/4/1972; 27/6/1972).

En correspondencia con esta “violencia desde abajo” e *in crescendo*, se acentúan las imágenes de caos social brindadas por el diario. En ellas, se describe a una población civil presa del “pánico”, el “terror”, la “confusión” y la “desolación”. Se responsabiliza a los manifestantes, bajo un nuevo modo de designarlos, abonando la atmósfera de desorden que permea la otredad negativa: “multitud”, “muchedumbre” o “turba”, a la que se adjudican cualidades agresivas. Es en el segundo Rosariazo donde la efigie de la turba aparece, para luego ser reutilizada (*La Prensa*, 19/9/1969). Y a raíz de la “turba de revoltosos” que según los periodistas actúa en el Mendozazo (*La Prensa*, 5/4/1972), el Ministro del Interior Mor Roig efectúa curiosas declaraciones, en las que explica que una “[...] multitud fue arrastrada por los estimulantes de la violencia incontrolada”, identificados éstos como “agentes de la subversión, que buscan en el terror o en el caos el clima propicio para su tarea desquiciadora” (*La Prensa*, 6/4/1972).

Como novedad, al “subversivo” se le añade el registro del terror -término que será empleado más frecuentemente de ahora en más-, entrelazado al léxico correspondiente al desorden. A su vez, los imaginarios del terror, la confusión y la anarquía son alimentados por las analogías bélicas implementadas para referir a los choques entre el personal de seguridad y quienes se movilizan, como se ve en el segundo Tucumanazo: “anoche la ciudad presentaba el aspecto de una población afectada por una contienda armada” (*La Prensa*, 12/11/1970) y “las calles del centro eran un verdadero campo de batalla, en donde los contendientes se enfrentaban con saña y sin contemplaciones” (*La Prensa*, 13/11/1970).

En cuanto a esas multitudes conformadas por obreros, estudiantes y vecinos, notamos que con el post Cordobazo se tiende a destacar algo más su identidad política, sobre todo en el caso de los dos primeros componentes. Enfatizando su oposición a los gobiernos de la “Revolución Argentina”, se los define ya no sólo por su carácter de manifestantes o “revoltosos”, sino también por sus vítores a Perón, como ocurre con los estudiantes de La Plata que dan su apoyo al Viborazo (*La Prensa*, 18/3/1971) y con los obreros nucleados en torno a la CGT, durante el Mendozazo (*La Prensa*, 5/4/1972). Al compás de esta creciente especificación, la caracterización tiende a ser pueril en los estudiantes, salvo que se indique la presencia de armas o la filiación a ideologías “extremistas”. Tal es el caso de las asambleas que en La Plata despiertan los Rosariazos, cuando se les adjudica peligrosidad a causa la comisión de “atentados terroristas” (*La Prensa*, 28/8/1969; énfasis nuestro), así como por su coqueteo con el “castrocomunismo” y el “ala izquierda del peronismo”, al tratarse de jóvenes pertenecientes a organizaciones armadas (*La Prensa*, 20/9/1969). Otro mote muy utilizado es el de “activista”; a la persona que cumple con esa cualidad, se le reconoce profesionalidad y adiestramiento para la tarea subversiva (*La Prensa*, 19/9/1969).

Gracias a los “azos”, la idea de la subversión apátrida y amoral ya comienza a tener eco en las páginas de *La Prensa*. Una ilustrativa sentencia es la recolectada por el comunicado del Ministerio del Interior, elevado con motivo del Viborazo. En él, se responsabiliza *moralmente* a los grupos armados que “levantan banderas que no son las que nos ha dado nuestra Patria” y actúan guiados por “intereses antinacionales”, por lo que no son más que:

“[...] grupos ideológicamente extranjeros que intentan copar el movimiento obrero argentino, cuyo claro sentido nacional es manifiesto, apartar de la disciplina del estudio a nuestra juventud universitaria y hacer aparecer como enemigos del pueblo a las fuerzas del orden que, con riesgo de sus vidas, están impidiendo la destrucción incesante de las fuerzas de trabajo” (*La Prensa*, 16/3/1971).

Finalizada esta caracterización, se convoca a la “conciliación nacional” (*La Prensa*, 16/3/1971). Ya luego del Cordobazo, se hace más fuerte la construcción de la subversión guerrillera que reniega de las instituciones republicanas. Al identificar Onganía y el General Imaz (Ministro del Interior durante los Rosariazos) a éstas últimas con el cimiento de la argentinidad (*La Prensa*, 5/6/1969; 20/11/1969), se propone una operación de sentido por la cual a la subversión antinacional se le opone un “nosotros” que condensa en sí las virtudes argentinas. A ello subyace la perversión de la conducta que el accionar subversivo ocasiona, convocando a una reconstrucción moral que inicie en los hogares, desde la familia, para

apartar a los estudiantes de la influencia de “agitadores profesionales” (*La Prensa*, 12/11/1970).

En *La Opinión*, para las coberturas del Mendozazo y del tercer Tucumanazo o Quintazo, se utilizan términos tales como “pronunciamiento popular”, “manifestación” y “acto de protesta popular” (*La Opinión*, 5/4/1972). Se hace alusión a los distintos reclamos de los “manifestantes” o “huelguistas”, su accionar, y el de la fuerza policial. En contraposición con *La Prensa*, se enfatiza el carácter pacífico de las “concentraciones”, cuando el accionar de los protagonistas es colocado como una respuesta o bien como una manera de “resistir” a la represión policial. En su narración del Quintazo, se habla de “disturbios como consecuencia de la acción policial”, de estudiantes que “respondían a la acción de los soldados”, detenciones que derivaron en una mayor “hostilidad estudiantil” y que tuvieron como “réplica” la ocupación de facultades; se define la situación como un “acto de protesta”, “reprimido severamente” (*La Opinión*, 24/6/1972).

Mientras que *La Prensa* lo reproduce sin cuestionamientos, los periodistas de *La Opinión* se distancian del discurso de las autoridades, el cual adjudica los hechos a “grupos de agitadores”, “sectores que no quieren la institucionalización del país” y “agentes de la subversión” (*La Opinión*, 6/4/1972). Para el Mendozazo, el diario publica notas con un enfoque analítico, dirigidas a evaluar la complejidad de los sucesos y las reivindicaciones de los huelguistas. Las protestas son, entonces, el resultado de una crisis económica que impacta en clases medias y sectores populares. Se sostiene que estos “explosivos conflictos sociales”, se dan en provincias con cierta “perspectiva”, es decir, en donde existe un “status político-social equilibrado y un estudiantado pacífico”. En ellas, se expresan conflictos de orden económico de larga data, que continúan sin solución. Confiriéndole legitimidad al reclamo de los manifestantes, el diario alude a pronunciamientos que se oponen a los altos costos de vida, producto de “excesivos aumentos” tarifarios (*La Opinión*, 4/5/1972). Días después de lo ocurrido, se argumenta que los “disturbios” en Mendoza podrían cobrar un significado económicamente semejante al que asumió el Cordobazo respecto a la estrategia de Krieger Vasena (*La Opinión*, 9/4/1972). Como reza una reflexión publicada en primera plana: “Estos son síntomas acumulados que indican que una seria enfermedad del país es su economía” (*La Opinión*, 5/4/1972).

Ahora bien: si las protestas se explican por elementos estructurales, ¿qué rol se confiere a la guerrilla en ellos? Meses antes del Mendozazo, se publica un artículo en el que se hace palpable la preocupación por la existencia de “grupos de guerrilla urbana”, que generan un problema político y militar para el gobierno. Siguiendo la línea analítica

mencionada, el diario propone una interpretación de las motivaciones de estos grupos, principalmente ligada a cuestiones de índole económica, como son las migraciones internas, los problemas de vivienda y el déficit alimenticio. Las principales ciudades en las que se dan conflictos políticos, sindicales y estudiantiles son vistas como “caldos de cultivo” para la proliferación de estas organizaciones. Al posar su atención en estas problemáticas, simbolizan una alternativa política para aquellos que no encuentran las soluciones esperadas vía entes oficiales o sindicatos. Ante la incapacidad de estos últimos, *La Opinión* asegura que “las organizaciones radicalizadas”-peronistas y no peronistas- tienen algo que ofrecer: permiten que la gente se incorpore a ellas para librar su lucha de forma metódica (*La Opinión*, 29/6/1971). Si bien en este análisis asoman los grupos de guerrilla que pretenden sumar adherentes como consecuencia del descontento popular, en la interpretación de los acontecimientos, esto ni deslegitima el reclamo de los manifestantes, ni se habla de ellos cual si fueran una masa plausible de ser dirigida por las organizaciones armadas. De hecho, luego del Mendozazo, *La Opinión* publica un artículo en el que se recuperan los testimonios de participantes directos, se asegura la espontaneidad con la que actuaron los manifestantes y la ausencia de “instigadores profesionales o terroristas organizados” (*La Opinión*, 7/4/1972).

Hasta aquí, notamos que *La Opinión* no alimenta directa o explícitamente esa operatoria semántica de oposición entre un “nosotros” y un “otros”. Aun así, reproduce algunos de los significantes ya presentes en el campo que estructura la identidad subversiva, tales como “terrorismo”, refiriéndose a la guerrilla como una plétora de “organizaciones radicalizadas”. Ellas también son asociadas al comunismo y al peronismo, como también ocurre en las páginas de *La Prensa*. Queda trazada así la conexión entre “terror”/“terrorismo” y (“subversión” o) “extremismo”, a la que subyacen identidades políticas, portadas por jóvenes, con una actitud altamente contestataria frente al régimen dictatorial. Ligadas a ellos, hallamos el imaginario de la peligrosidad y la desobediencia, enfatizado por *La Prensa*.

De acuerdo con el posestructuralismo de Laclau y Mouffe (2006), lo social se constituye como un orden simbólico: toda práctica se instituye como tal gracias a ciertos términos que fijan el sentido de cadena equivalencial, lo cual influye en la forja de las identidades. Entonces, podemos pensar que comienza a eslabonarse una cadena de significantes que estructura y pone en relación ciertos términos, configurando así la imagen que se tiene de ese “otro”, sobre el que cada vez se pone mayor atención.

Frente a las declaraciones de Lanusse que adjudican el tercer levantamiento tucumano a la “escalada subversiva” y al “extremismo subversivo”, el diario asume que, a diferencia del anterior Tucumanazo (en el que los estudiantes habían sido movilizados por “consignas

ultraizquierdistas”), se ensayó un “tipo de acción común con evidente contenido político” (*La Opinión*, 27/6/1972). Sin embargo, observamos que en la descripción de los sucesos ya se señala de forma muy frecuente la existencia de “disturbios”, “desmanes” y “violencia”. Pero generalmente, éstos son identificados como un resultado tanto de la acción policial como de los manifestantes. Se habla de “enfrentamientos” o “choques” entre “huelguistas” y policía, que traen como consecuencia la muerte de manifestantes, sonidos de armas de fuego, avalanchas, policías intimidando mediante gases lacrimógenos y atacando asambleas populares. Al igual que en *La Prensa*, los periodistas hacen referencia a la “calma” y la “normalización” de la ciudad en los días posteriores al levantamiento, aunque se apartan, al no conferir un rol preponderante a los agentes de seguridad (*La Opinión*, 9/4/1972). Así, se termina recayendo en la recreación de un cuadro de caos, algo menos apocalíptico que el pintado por *La Prensa*. Su principal componente es la violencia, mas éste queda justificado por una situación global, sin provenir de un único responsable.

Trelew, Devoto, Ezeiza: el reprobado ejercicio del terror y la conmoción por las muertes

El fusilamiento de un grupo de presos políticos que intentó huir de la Base Aeronaval Almirante Zar el 22 de agosto de 1972 (Trelew), despertó el repudio de estudiantes universitarios y secundarios (entre otros actores), con manifestaciones. Meses antes de la asunción de Cámpora en mayo de 1973, comienza a desarrollarse una aguda disputa entre burocracia sindical y Tendencia Revolucionaria, al interior del peronismo (Bonavena, 2011). Una multitud se congregó en torno al penal de Villa Devoto exigiendo la liberación de los presos políticos de la dictadura, en su mayoría de grupos armados. El 20 de junio de 1973, las columnas de manifestantes juveniles (Montoneros y Fuerzas Armadas Revolucionarias, principalmente) que fueron al reencuentro de Perón, recibieron la sorpresiva descarga de armas de fuego. La masacre de Ezeiza evidenció el vuelco de Perón hacia la ortodoxia del movimiento, con el fin de retornar al orden legal y constitucional. La fiesta convertida en tragedia también reveló que la Triple A, cuya actividad se afianzaría durante 1974, ya estaba funcionando (Svampa, s/f).

Desde *La Prensa*, el relato tiende a ser más breve, para poner mayor empeño al realce de las identidades políticas. Según se destaca a propósito de la segunda masacre, “las versiones [...] son sumamente contradictorias y aumentan la confusión ante la carencia de información oficial coherente” (*La Prensa*, 22/6/1973). Se vigoriza, de este modo, todo un imaginario de lo caótico y temible (surgido ya con el Cordobazo), al hablar de “cruentos episodios” y “conmoción”, cuyo catalizador es la violencia desatada por la subversión, ya sea

contra las fuerzas policiales o para con las fracciones de la izquierda revolucionaria peronista, como se da en Ezeiza (*La Prensa*, 26/6/1973). En estrecha relación con ese imaginario, ese “nosotros” es amedrentado por esa otredad negativa, a la que a su condición antiargentina y delictiva se agrega una asociación con a la muerte y el odio:

La pérdida de vidas humanas es siempre penosa, aunque ellas pertenezcan a delincuentes que asesinan para apoderarse de lo ajeno o que arman su brazo homicida para imponer por la sangre y la violencia ideas políticas que no responden a la esencia del ser argentino (*La Prensa*, 24/8/1972).

En los últimos tiempos, el país se ha visto conmovido por hechos de violencia que sucesivamente han ido ensangrentando las huellas de los agentes del odio y la subversión. Numerosos ciudadanos han sido alevosamente asesinados por quienes se autodefinen como defensores del pueblo sin más títulos que una fanática vocación de destrucción y muerte, alimentada por una ideología atea y materialista totalmente ajena a las más caras convicciones republicanas de los argentinos (*La Prensa*, 26/8/1972).

Al quedar directamente implicadas las organizaciones armadas -principalmente peronistas-, la adjetivación que nutre la otredad negativa gira en torno a esta pertenencia ideológica. A diferencia del estudiantado que mediante asambleas y tomas se solidariza con los muertos de Trelew y al que queda reservado el mote de “revoltosos”, los que tomaron parte directa en la tentativa de escape de la base aeronaval son calificados más específica y severmente, al referir a su condición de guerrilleros; lo mismo ocurre con los presos de Devoto y parte de quienes se concentran frente al penal. En este último caso, se los tilda de “manifestantes”, hombres y mujeres especialmente jóvenes, que cantan estribillos contra el gobierno previo al de Cámpora y enarbolan carteles de la Juventud Peronista o bien de la guerrilla. A los detenidos se los identifica con esas ideologías, hablando de “presos por delitos comunes” y “manifestantes” que se amotinan (*La Prensa*, 26/5/1973). Pero ya en Trelew se había dado un paso más allá: se habla de “extremistas”, “terroristas” y “sediciosos”, a los que se les secuestra “literatura subversiva” y son encontrados en actitud de grave insumisión, ya que no sólo toman la base, sino que dan lugar a enfrentamientos con militares, suscitando una “rebelión” (*La Prensa*, 23-24/8/1972). Terrorismo y subversión quedan definitivamente maridados en el campo discursivo de la otredad negativa. Ese terrorismo se ejerce no sólo a partir de las armas, sino de una metodología más amplia e innovadora, que abarca la “acción psicológica”, lo que convalida la necesidad de atacar ese “[...] enemigo enquistado dentro del cuerpo de la República” (*La Prensa*, 26/8/1972). Queda introducida la célebre metáfora

biologicista, ya no por los funcionarios, sino por los mismos periodistas. Y a ella se juxtapone la analogía bélica, que habla del ejercicio de un nuevo tipo de violencia.

Por su parte, *La Opinión* nuevamente describe los hechos como “manifestaciones”, “actos de protesta” y “concentraciones”. A pesar de esto, notamos que al referirse a sus artífices, ya no sólo emerge el calificativo “manifestantes”, sino también “activistas”, lo cual denota tanto reclamos como identidades políticas, aunque difusamente. En la masacre de Trelew, se hace referencia a grupos de estudiantes o en algunos casos, a “activistas” que protagonizaron luchas contra “fuerzas del orden” en distintas provincias (*La Opinión*, 23/8/1972). Entre sus formas de manifestación, se destacan las concentraciones, ocupaciones de facultad y actos en conmemoración de los “extremistas” muertos en Trelew. Análogamente y en relación con el Devotazo, *La Opinión* menciona la existencia de incidentes o “situaciones de tensión” entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante la liberación de presos/“milитantes políticos” de la cárcel de Villa Devoto (*La Opinión*, 27/5/1973).

Hay operativos de “prevención” destinados a evitar la “alteración del orden” y que los acontecimientos sean aprovechados por “perturbadores sociales” (*La Opinión*, 24/8/1972). Más allá de las repercusiones, en los acontecimientos de Trelew, los periodistas usan los calificativos “terroristas” y “extremistas” con los miembros de las organizaciones armadas asesinados (*La Opinión*, 23/8/1972). Así, los activistas movilizados en respuesta a las muertes no participan de la construcción de ese “otro negativo”. En cambio, los militantes de las organizaciones armadas (“terroristas” o “guerrilleros”) son los que encarnan esa figura.

Aunque se hable de “terroristas”, se enfatiza su “drástica represión” y muerte como un hecho trágico que conmociona a toda la población, lo que, si bien suaviza la carga despectiva que recae sobre esa otredad negativa, pone de relieve las tensiones que aquejan al orden social. Más claramente, las muertes van contra “[...] la aspiración de la inmensa mayoría del país, que suele graficarse como la ‘pacificación nacional’” (*La Opinión*, 23/8/1972).

Según *La Opinión*, el arribo de Perón produjo una “movilización popular sin precedentes”. Sin embargo, “un incidente aislado” impidió la presencia del ex presidente en el acto y se plantea una confusión respecto al motivo que originó los “sangrientos disturbios”. Se teje como hipótesis que todo pudo haberse desatado tanto por un enfrentamiento entre miembros de la custodia y manifestantes de “agrupaciones de izquierda”, como por diferencias entre estos últimos. Pero, simultáneamente, los periodistas resaltan el “júbilo”, la “fiesta popular” y la “disciplina” previamente vividos (*La Opinión*, 21/6/1973). La masacre de Trelew puede ser entendida como otro punto de inflexión de una escalada de violencia,

obra no sólo de los sectores armados (peronistas y de izquierda), sino también del accionar de aquellas fuerzas que responden a autoridades estatales.

La “primavera” camporista: cataclismo *versus* estado de cambio social

El clima de efervescencia propició la toma de diversos establecimientos públicos y privados, por parte de las facciones peronistas enemistadas, pero, principalmente, por una gran masa no alineada. Ellas apuntaban a la remoción de algunos funcionarios del gobierno dictatorial previo (Nievas, 1999).

La Opinión habla de ocupaciones de sedes de organismos oficiales, facultades y plantas emisoras de radio y televisión, a cargo de grupos que responden a la Juventud Peronista, lo cual simplifica la variedad de actores implicados. El hecho de que se refiera a los protagonistas como “ocupantes” y “activistas”, indica que se los identifica por su militancia política -aunque vagamente, salvo cuando se mencione a aquella agrupación- una vez más.

Por otra parte, los periodistas enfatizan el carácter pacífico de las mismas y buscan comprender sus motivaciones. Complejizando el análisis del cuadro, en el caso de las emisoras, sostienen que, más allá de las reivindicaciones del personal, la Juventud Sindical Peronista utiliza las ocupaciones para difundir su posición e influir en el espectro peronista.

Con las tomas de universidades nacionales (un “cuadro de convulsión estudiantil”), se toma distancia de la concepción que de ellas poseen los sectores “tradicionales”:

La alarma que ello suscita en los sectores tradicionales de la sociedad cuya opinión pudo conocerse a través de las editoriales publicadas la semana pasada por los matutinos *La Prensa* y *La Nación*, no se afina tanto en el ámbito exclusivo de la universidad sino en que la inquietud de que ese conflicto se generalice al país en su conjunto. [...] El temor ancestral a la “revolución de las masas”, encuentra en los grupos activos de la extrema derecha y la extrema izquierda sus mejores canales de irradiación, ya que ambas falanges viven todo conflicto normal en los períodos de cambio como una antesala del cataclismo (*La Opinión*, 12/6/1973).

Con *La Prensa*, la falta de material obstaculizó el relevamiento completo del mes de junio de 1973. Sólo es posible reconstruir su postura a partir del fragmento de *La Opinión*.

El suceso pareciera no modificar la edificación de la otredad negativa. Para *La Opinión*, la Juventud Peronista no encarna un grupo problemático por sí mismo. No obstante y como también veremos a propósito de la protesta a que dio lugar el Rodrigazo, sí se realiza un relevante aporte a la mirada sobre el orden. *La Prensa* plantea que estos grupos movilizadores representan una amenaza para el ya frágil orden social, mientras que desde *La Opinión* se insiste en un potencial cambio social, brindado una sensación menos apocalíptica.

La subversión fabril antinacional y una problemática violencia bifronte

Muerto Perón y ante la intensidad guerrillera y de ultraderecha, se alzaron las voces de empresarios y Fuerzas Armadas, solicitando orden. Con ello, se inició la desarticulación de las fuerzas sociales movilizadas. Ya desplegado el “Operativo Independencia” en febrero de 1975, el 20 de marzo, el Ministerio del Interior denunció un “complot subversivo” en la ciudad fabril de Villa Constitución, impulsando el “Operativo Serpiente Roja del Paraná”. En respuesta, se dio una huelga obrera de dos meses (Santella, 2003).

A diferencia de los eventos anteriormente analizados, en los que se imputa a la subversión el haber activado las movilizaciones una vez desatadas éstas, se habla de su incidencia todavía antes de la huelga de Villa Constitución. De hecho, la medida de fuerza es la respuesta a la denuncia gubernamental de un “complot subversivo” y la concomitante detención de obreros y dirigentes gremiales de la Unión Obrero Metalúrgica, UOM (*La Prensa*, 21/3/1975). Ya la noción de “complot” pone en funcionamiento una serie de caracterizaciones sobre la subversión, relacionadas con su carácter infiltrado, escabullida aun entre la población “inocente”, y que busca cumplir sus propósitos con un trabajo fino.

Así, se retoma la maniobra consistente en acusar a los “grupos sediciosos” de aprovecharse de los trabajadores. El titular del día posterior al inicio de la huelga, informa: “El gobierno denunció un plan subversivo. Señala que se pretendía paralizar la industria pesada de la Nación y copar las delegaciones gremiales” (*La Prensa*, 21/3/1975). Nuevamente, los obreros que se movilizan no son los problemáticos, sino la “deleznable minoría antinacional” que atenta contra el país entero, mediante el “terrorismo industrial”.

Aunque la idea de la presencia terrorista en las fábricas se vuelve muy potente, los “atentados terroristas” no tienen lugar al interior de los establecimientos ocupados, entre quienes se movilizan. Llamativamente, por más que el eje del supuesto complot sea el ambiente fabril, las noticias tienden a desplazar la atención desde los huelguistas hacia los “grupos extremistas”, a los que se entrelaza un campo semántico relativo a la muerte, las armas y la agresividad, en tanto –“a balazos”- terminan con la vida de policías y copan las unidades de seguridad (*La Prensa*, 24-25/3/1975). Y ese campo remite al desorden: la población ingresa en un estado de alarma y nerviosismo tales que se fuerza el cese de actividades. La ciudadanía resulta aquejada en su totalidad, pero no por la acción de los huelguistas, sino a causa de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y estas agrupaciones y los atentados que ellas perpetrar (*La Prensa*, 24- 26/3/1975; 24- 25/4/1975).

De hecho, a la acción sediciosa se contraponen cierta pasividad obrera: los trabajadores concurren a sus puestos sin realizar tarea alguna y sin provocar “incidentes” (*La Prensa*, 25-27/3/1975). Esa quietud es quebrada exclusivamente por una concentración en Plaza de la Constitución (ciudad de Rosario). A la represión con gases lacrimógenos, se responde arrojando piedras y otros elementos. Ello deriva en corridas, enfrentamientos con el personal de seguridad y, finalmente, en la paralización de las actividades de la ciudad y el temor entre la población. Esta es la única vez en que se acude a la semántica del desorden para aludir a los obreros de Villa Constitución. Sin embargo, no por ello dejan de ser “manifestantes” y la única referencia a su actividad militante se resume en que enarbolan “carteles y leyendas”, sin aclarar cuáles eran ni sus consignas ni sus banderas políticas (*La Prensa*, 23/4/1975).

Justamente, otro contraste entre esos grupos terroristas y los huelguistas queda ligado a la mención de sus filiaciones políticas. Mientras que tíbiamente se llama “activistas” a los obreros detenidos por haberse constatado su contacto con la guerrilla, el primer conjunto es revestido por un contenido político más conciso. Los autores de los incidentes son, en un principio, vagamente vinculados al comunismo (*La Prensa*, 25/3/1975) y luego a la Organización Revolucionaria del Poder Obrero (un trotskista “tumor subversivo”), a la que finalmente se responsabiliza del complot (*La Prensa*, 10/5/1975).

Desde *La Opinión*, también se recuperan los términos de la denuncia oficial, aunque se suele poner en tela de juicio la fehaciente existencia del complot, algo que hacia el tramo final de la cobertura de *La prensa* también puede verse, con cierto tono de apremio a las autoridades nacionales. Se busca devolver una mirada más amplia, que brinde otra perspectiva desde la cual comprender la situación. En este marco, se resalta que el informe de denuncia se emitió en medio de la creciente expectativa nacional con que se aguardaba el plenario de la CGT y las 62 Organizaciones. Como “medida de fuerza”, casi veinte mil obreros metalúrgicos, ferroviarios, cerealeros, textiles y portuarios concretaron una “huelga de brazos caídos” reclamando la liberación de sus principales dirigentes, detenidos (*La Opinión*, 21/3/1975). Una vez más, se enfatiza el carácter pacífico de la protesta y de las ocupaciones llevadas a cabo por el personal de las plantas del complejo Acíndar, que fueron desalojadas por la Policía Federal. La detención de todos los delegados y subdelegados presentes (“activistas”) condujo a la ratificación de la medida (*La Opinión*, 27/3/1975).

Por otra parte, días después de la denuncia de complot, *La Opinión* publica un artículo acerca de un “confuso episodio” en donde cuarenta “desconocidos” intentaron cooptar la jefatura de policía de la provincia, lo cual originó un intenso tiroteo. Al mismo tiempo, se hace referencia a otros dos “atentados terroristas”: uno en el que estalló una bomba en el

domicilio de un obrero metalúrgico que integraba la nómina clasista; y otro, contra depósitos de víveres recolectados para los huelguistas. El periódico da mucha importancia a una declaración dirigida a la presidente, emitida por algunos partidos políticos. En ella, se denuncia la “actuación impune de bandas de civiles armados y embozados dedicados a sembrar el terror y el caos en Villa Constitución”. A su vez, el Ministro de Trabajo llama a las bases a mantener la solidez de las organizaciones sindicales y a luchar junto con las Fuerzas Armadas para eliminar al “enemigo que atenta contra la paz y la seguridad del país”. En su comunicado no sólo se denuncia la “infiltración de la izquierda” sino también “el accionar de la derecha”, entendidos ambos como factores que tienden a frenar el proceso de reconstrucción y liberación nacional. En esta misma línea, el diario transmite las declaraciones de un legislador, exige al Ministro del Interior que confirme si tiene conocimiento sobre el accionar de personas que integran las fuerzas de seguridad, y que produjeron “actos de verdadera depredación”, violando domicilios, “intimidando a hombres y mujeres”, haciendo exhibición de “armas de guerra prohibidas” y disparando cerraduras (*La Opinión*, 27/3/1975). Al igual que en el resto de los levantamientos mencionados anteriormente, se alude a la paralización de la zona y se resalta el hecho de que, con el desalojo de las fábricas, se “recobró la calma” (*La Opinión*, 27/3/1975). De todas maneras, vemos cómo la idea de caos ya no queda ligada únicamente a los sectores de la izquierda radicalizada, sino también al accionar de la derecha, que también es incluido dentro del universo significativo del terrorismo. Esto problematiza las responsabilidades sociales frente al foco del conflicto. Como también destaca Franco (2012) a propósito de su análisis de *La Opinión* para el período 1973-1976, podría pensarse que con esto queda prefigurada lo que más tarde sería la “Teoría de los dos demonios”, recolectada y consagrada en el primer prólogo del Informe de la CONADEP (1984), *Nunca Más*. Pensamos que algo parecido ocurre con la lógica acción/reacción con que los orígenes de la violencia es cifrada en *La Prensa*. Para *La Opinión*, derecha e izquierda son “grupos fraticidas” que encarnan la “antipatria”, responsables de la desestabilización social. Las formas de acción de la Triple A comienzan a generar una atmósfera de caos y confusión que debe ser resuelta. En este contexto, la sociedad es definida como víctima de las dos fracciones, quedando exenta de responsabilidades.

La asignación de culpas sociales, ante un orden hondamente resquebrajado

En 1975, a la crisis institucional se añadió la percepción de una innegable crisis económica. Fracasado el último intento de reedición de la política económica típicamente

peronista, Celestino Rodrigo fue designado Ministro de Economía en junio. El 24 de ese mes, la UOM se movilizó contra el ajuste que significó el “Rodrigazo”. Tres días después, la CGT convocó a una marcha a Plaza de Mayo, en la que masivamente se pidió la renuncia de López Rega y Rodrigo (Svampa, s/f). La sensación de caos se había apoderado de cada poro social.

En principio, cabe destacar el tono marcadamente sindical de la protesta. *La prensa* en ningún momento sugiere, explícita o implícitamente, que otros sectores o actores la apoyan e intervienen. Solamente se menciona la participación de obreros nucleados en torno a la CGT, a los que se califica por su condición laboral y son reconocidos como peronistas, en razón del apoyo que dan a la presidente y de que entonan “la marcha partidaria”.

Las representaciones en torno a la violencia y el desorden no aparecen en escena más que cuando se resalta el tono agravante de los cánticos contra López Rega y Rodrigo, los silbidos a todo aquél que se asomara desde los balcones del Ministerio de Bienestar Social y los leves choques con la policía que custodiaba la situación. No obstante, carecen de un tratamiento trascendente. La violencia, entonces, es de una naturaleza mucho más tenue. Probablemente sea ello, así como la ausencia de influencias “subversivas”, lo que signa la tónica no peyorativa con la que se habla de los obreros movilizados. Asimismo, se alude a una “multitud” que lejos está de la “turba” enardecida, que promueve el caos y atemoriza al resto de la población civil (*La Prensa*, 28/6/1975). Por tanto, el concepto de (des)orden manejado en esta oportunidad tiene que ver con aquello que esa masiva movilización expresa. El orden sacudido no viene atado a la práctica de ciertos colectivos que buscan hacer oír sus reclamos, sino a una situación caótica que, si bien los trasciende, implica a la subversión. Un respaldo de esta interpretación está en el lineamiento del editorial publicado el 29 de junio, elocuentemente titulado “Horas de grave ansiedad pública”. En él, se recrea un escenario pleno de “incertidumbre”, “zozobra”, “pesimismo”, “inquietud” y “desorientación”. Aunque se reconoce que el disparador de este estado generalizado fue la política económica de la gestión de la viuda de Perón, se responsabiliza al peronismo (en su conjunto) por haber engendrado a la “guerrilla desembozada”, entre otros factores (*La Prensa*, 29/6/1975).

Por su parte, *La Opinión* presenta el evento como un “estado de movilización”, una serie de “medidas de fuerza” de carácter pacífico, que incluyen “concentraciones” y paros generales, encabezadas por sindicatos y gremios estatales, ante una “contradicción que emana del Estado” (*La Opinión*, 27/6/1975). Esto fue tomado como un “verdadero plebiscito popular que reprobó a la conducción económica” y a quienes le brindaban sustento político. Se enfatiza el hecho de que esa “manifestación ordenada, masiva y unívoca de las fuerzas sindicales” fue sin duda “una de las más singulares que vivó el país” (*La Opinión*, 28/6/1975).

Una vez más, *La Opinión* legitima el reclamo obrero. Haciendo hincapié en sus demandas, en los errores cometidos por el gobierno y calificando neutralmente a quienes encabezaron las protestas como “organizadores de medidas de fuerza”, ellos quedarían excluidos de esa otredad negativa. Aun así, se alude al llamamiento que la presidente hace a las Fuerzas Armadas, con el objeto de exaltar su “responsabilidad en la lucha contra la subversión” (*La Opinión*, 28/6/1975).

Algunas reflexiones finales, mas nunca del todo concluyentes

Este pequeño trabajo buscó desentrañar la configuración de la otredad negativa en los años previos al proceso genocida de los setenta, en lo específicamente concerniente a la movilización popular. Sin embargo, hemos notado lo difícil que es concentrarse plenamente en los manifestantes (más en el caso de *La Prensa*), cada vez que se instala la idea de que en los sucesos interviene la guerrilla. Considerados como “revoltosos” (y otros calificativos), se disparan representaciones de un orden social corroído. Pero la peligrosidad de estos agentes es fundamentada a partir de la posibilidad de que en ellos prenda la semilla de la subversión. Quienes nutren las movilizaciones pero no integran las agrupaciones armadas, son catalogados como “huelguistas” o “activistas”, al detectarse algún tipo de militancia. La figura del “otro negativo” está centrada en la guerrilla, mientras que los manifestantes no guerrilleros quedarían incluidos sólo de manera indirecta, cuando se sospecha su manipulación por parte de agentes armados.

Mientras que *La Prensa* coadyuva en la instalación y diseminación de la imagen de la subversión que emana desde el funcionariado estatal, *La Opinión* se muestra algo reticente a la aplicación del término, en un primer momento. Ello queda plasmado en su originaria preferencia por aludir eufemísticamente a la guerrilla como “agrupaciones de izquierda” (peronistas y no peronistas) u “organizaciones radicalizadas”. En relación con las movilizaciones populares, se suele reivindicar el reclamo de los manifestantes, lo cual viene atado a las concepciones del orden social que rastrean analíticamente y fomentan desde sus artículos: los reclamos arraigan en problemáticas estructurales, fundamentalmente económicas. En ningún momento se refiere a aquellos que promueven las luchas como “subversivos” o “revoltosos”, sino como “huelguistas”, “manifestantes”, “organizadores de medidas de fuerza”, “ocupantes” y –coincidiendo en este punto con *La Prensa*- en caso que éstos tengan una identidad política más definida, “activistas”. En cuanto a los grupos armados, éstos son un desprendimiento de esa persistente situación crítica y permiten canalizar los reclamos populares que no encuentran solución por las vías institucionales. Es

por ello que, en un principio, si bien son considerados problemáticos, no son demonizados. He aquí que componen una alteridad potencialmente disruptiva pero, al momento, no personifican un peligro inminente. Sin embargo, en el Devotazo y las masacres, hay un cambio de registro: se expone el discurso oficial, sin reflexiones mayores, a diferencia de la cobertura de los “azos”. Notamos que los periodistas evitan una toma de posición muy marcada.

Pese a sus divergencias iniciales, los periódicos convergen en una misma idea de la subversión en vísperas del último régimen dictatorial. Mientras que el diario conservador culpa al peronismo por permitir el desarrollo de la guerrilla y contribuir a la ingobernabilidad, *La Opinión* divide la responsabilidad entre las organizaciones armadas y el aparato paraestatal de derecha. De un modo u otro, la otredad negativa recae en las organizaciones armadas. Ellas participan de las movilizaciones, amedrentando el orden.

En ese sentido, los “azos” ponen en evidencia —especialmente desde la visión más pesimista de *La Prensa*—, que algo había cambiado, poniendo sobre el tapete una alarmante efervescencia colectiva: la estabilidad social es atacada por acciones violentas, que son principalmente adjudicadas a quienes atentan contra el “normal” funcionamiento de las ciudades. En el gobierno camporista, las tomas exacerbaban ese tono reprobatorio hacia las tendencias que buscan la revolución social. Tras la movilización contra Rodrigo y López Rega, se desemboca en un diagnóstico de total corrupción moral, económica y política, con raíces en la doctrina justicialista. Pese a que el componente que engrosa las filas de la otredad negativa no haya participado en este último suceso, sí es responsabilizado por el profundo desorden.

La Opinión tiene un posicionamiento pendular. Primeramente, trabaja sobre un concepto de orden no tan superficial, cuyo deterioro obedece a variables económicas, políticas y sociales. No obstante, la masacre de Trelew ya había introducido la noción de “pacificación social” y la imagen de una sociedad conmocionada. Esta última se fortifica con anterioridad a la destitución de Isabel, con una subversión que socava la “honestidad” argentina. En la marcha post Rodrigazo, se hace evidente que el caos tiene raíces en la inoperancia de un gobierno que, entre otras cosas, no ha resuelto la lucha contra la subversión.

Así, la otredad es negativa en tanto expresa identidades políticas contestatarias, que alzan su voz contra los intentos por instaurar determinadas cosmovisiones. Justamente, el “extremismo ideológico” condensa en sí la oposición a la “Revolución Argentina”, que se rebela también contra el último gobierno peronista. Y es allí, en esa extrema radicalización que adquieren las movilizaciones populares y sus actores, en donde hallamos lo que Feinstein

(2011) dilucida como el ensayo de cierta autonomía. Una autonomía que escapa a los esfuerzos de normalización que emanan del poder. Una autonomía que, en el fondo, resiste y cuestiona activamente las formas de vida que buscan imponerse; ella brota de convicciones político-ideológicas (un ser) plasmadas en un hacer concreto, condenado desde la tecnología de poder que revisten las prácticas genocidas. Lo problemático de esa otredad negativa es la percepción de su ser/hacer no asimilable e incompatible con un modelo de relaciones sociales que se pretende generalizar.

Para el poder, la movilización es peligrosa. Por medio de sus herramientas (los medios de comunicación, entre otras), trata de emplazar en el imaginario social la retórica del desorden y de una identidad nacional amenazada. El proceso de establecimiento de las fronteras entre un “nosotros” y un “otros”, entre un “adentro” y un “afuera” -y para el caso del enemigo interno, de un componente que es necesario extirpar del propio cuerpo-, se traduce en rivales concepciones del orden y del conflicto social. A la galaxia significativa de la otredad negativa se enlaza todo un campo simbólico de caos y destrucción, sobre el que es imperioso operar. Esta lógica queda puesta de relieve en nuestro país en la desmovilización, la generalización de cierta apatía política y el florecimiento del individualismo en las relaciones sociales, tendencias que en los últimos tiempos parecieran revertirse, progresivamente.

Las fuentes relevadas iluminan cómo la prensa argentina actuó como factor de poder entre 1969 y 1976. Las representaciones sociales construidas y puestas en circulación –aun con sus vaivenes temporales, mayormente acentuados en *La Opinión*-, fueron funcionales a la mecánica represiva. Ello porque, en términos de Kornblit (s/f), las imágenes que transitan la vida colectiva guían la conducta y las interacciones, al intervenir en la percepción y constitución de la realidad. Esas representaciones tienen efectos concretos, que trascienden el plano meramente simbólico y discursivo, para desembocar, en el caso argentino, en la muerte y la desaparición de grupos políticamente definidos. Y si la guerrilla podía infectar al resto, era necesario actuar sobre la movilización, uno de los grandes focos de contagio. Esto no quiere decir que entre representaciones y conducta no medie un intrincado proceso de recepción, difícil de captar. Asimismo, nuestro universo de estudio dista de ser exhaustivo, dado que abarca solamente dos exponentes de la prensa gráfica.

Hemos constatado que la otredad negativa no fue creada *ex nihilo* por el PRN. Es fruto de todo un proceso histórico previo (complejizado aún más por la construcción social del pasado reciente, de una memoria nunca estática), surcado por oscuras tensiones que fueron modificando sus matices.

Bibliografía

Fuentes primarias

La Opinión (29/6/1971 al 29/6/1975).

La Prensa (29/5/1969 al 29/6/1975).

Referencias bibliográficas

BONAVENA, P. A. (2011). “El movimiento estudiantil frente a la masacre en Trelew del 22 de agosto de 1972”. En *Conflicto Social* (pp. 201-230), N°5, IV, IIGG (FSOC-UBA). Disponible en: http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/05/11_bonavena.pdf

CONADEP (1984). “Prólogo” a *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas* (pp. 7-11). Bs. As.: EUDEBA.

DE RIZ, L. (1984). *Historia Gráfica de la Argentina Contemporánea*. Bs. As.: Hyspamérica.

FEIERSTEIN, D. (2011). *El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina*. Bs. As.: FCE.

FRANCO, M. (2012). *Un enemigo para la Nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*. Bs. As.: FCE.

KORNBLIT, A. L. (s/f). *De las representaciones colectivas a las representaciones sociales*. Bs. As.: Editorial MIMEO.

LACLAU, E. y MOUFFE, CH. (2006). *Hegemonía y Estrategia Socialista*. Bs. As.: FCE.

NIEVAS, F. (1999). *Las tomas durante el gobierno de Cámpora*. Tesis de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales (FSOC-UBA).

PORTA, M. S. (2010). *Una trayectoria particular: el diario Buenos Aires Herald durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón en Argentina (1974-1976)*. Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos (UNSAM).

RAMÍREZ, A. J. y VIGUERA, A. (s/f). *La protesta social en la Argentina entre los setenta y los noventa. Actores, repertorios y horizontes*. Disponible en: http://docsfiles.com/pdf_la_protesta_en_la_argentina.html

SANTELLA, A. (2003). “La confrontación de Villa Constitución (Argentina, 1975)”. En *Documentos de Jóvenes Investigadores*, N°2, 2003, IIGG (FSOC-UBA). Disponible en: http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/documentos_resultados.php?opcion_ano=10&opcion_categoria=2

SANTELLA, A. y SCODELLER, G. (2012). "Ciclos de protestas sin situaciones revolucionarias, Argentina 1958-1969-2001". En C. Lachenal y K. Pirker (Coords.), *Movimientos sociales, derechos y nuevas ciudadanías en América Latina* (pp.79-109). Barcelona: Gedisa.

SVAMPA, M. (s/f). "El populismo imposible y sus actores, 1973-1976". En D. James (Dir.), *Nueva historia argentina. Violencia, proscripción y autoritarismo, 1955-1976* (pp. 381-436), Vol. 9. Bs. As.: Sudamericana.